

A propósito del «caso argentino»: ¿Nunca más?

Las «Madres de la Plaza de Mayo» de Buenos Aires se han encargado durante años de que la herida abierta en Argentina por la represión militar no cierre en falso. Los últimos meses, las declaraciones de algunos «arrepentidos» han recrudecido la pestilencia de una llaga sin cicatrizar. La autora de este artículo rememora la triste historia del «caso argentino» para contribuir con su recuerdo a que se haga realidad universal la famosa y rota promesa del «nunca más».

Marisa Regueiro *

LA celebración del cincuentenario del fin de la II Guerra Mundial nos invitaba —frente a las obligadas evocaciones del genocidio nazi— a la renovación de la promesa de «nunca jamás», cuando los relatos de los «vuelos de la muerte», las terribles revelaciones de asesinatos y torturas de los años de la Dictadura Militar en Argentina resucitaron pasados horrores, obstinados fantasmas.

El testimonio de algunos verdugos produce en los hombres y mujeres

* Licenciada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).

de bien repulsa y vergüenza, porque las aberrantes prácticas contra el prójimo que los «mesías de la Defensa Nacional» aplicaron en la Argentina en la década de los años 70 y parte de los ochenta, superan todo lo imaginable incluso por las mentes más truculentas. Y agudizan rechazo e indignación la impunidad de los homicidas —amparados en la llamada Ley del Punto Final (dic. 1986), en la de Obediencia Debida (jun. 1987) y en el Indulto más reciente— (1); la sospechosa complicidad del silencio de algunos miembros de la Iglesia y de muchos ciudadanos y políticos; y el matiz oportunista de los «desahogos» de represores y arrepentidos.

Ante los desvelamientos de los crueles modos represivos empleados —de los que ya teníamos noticia, aunque la verdad es que los relatos más recientes han avivado nuestra conciencia— nos asaltan varias preguntas: *¿por qué volvió a suceder?, ¿cómo fue posible?* Sin embargo, a la luz de la historia argentina pasada y reciente, *estos hechos* parecen —lamentablemente «a posteriori»— *anunciados y repetidos*: una y otra vez, los derechos humanos son conculcados por los que se abrogan el poder sin límite; una y otra vez la paranoia de un grupo se impone a una mayoría atemorizada o cómplice. Aunque resulte doloroso, *es imprescindible recordar*, porque el mejor aliado de los verdugos es el olvido de sus víctimas.

Las víctimas de la represión

LA CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), constituida en 1984 por orden de Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sábato, reconoció la dificultad de dar datos definitivos sobre el número de víctimas mortales de la represión militar porque el terror imperante determinó que muchos casos ni siquiera fueran denunciados. Redondeando cifras, la CONADEP nos habla de 29.000 víctimas de la represión, número que incluiría los 1.898 cadáveres encontrados y las 8.960 desapariciones documentadas, más las 18.000 desapariciones no denunciadas (2).

Como se demuestra en dicho informe a través de la amplia documentación estudiada, «la inmensa mayoría de las víctimas eran absolutamente

(1) El presidente Menem ha promulgado dos indultos: el de octubre de 1989 que devolvió la libertad a todos los procesados y el de diciembre de 1990, que benefició incluso a los ya condenados.

(2) Otra fuente, entre los muchos estudios realizados sobre el número de víctimas, la de Graciela Fernández Mejjide de la Asamblea Permanente pro Derechos Humanos, da un total de 15.000. Y una hi-

ajenas a cualquier tipo de terrorismo» y «no supusieron un peligro real para los “defensores” del orden público». El aparato represor alcanzó cotas de demencial extensión; y todas las capas sociales, todos los estados y las profesiones aportaron víctimas inocentes que fueron «re-inventadas» como «subversivas»:

«la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de “subversivo” tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como “marxismo-leninismo”, “apátridas”, “materialistas y ateos”, “enemigos de los valores occidentales y cristianos”, todo era posible... todos caían en la redada, dirigentes sindicalistas que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal, o por secuestrados bajo torturas.» (3).

Los represores

EN la Proclama Militar del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar encabezada por Jorge Videla anunciaba que la intervención perseguiría «el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigido contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder». Y entre los «objetivos básicos» del «Proceso de Reorganización Nacional» se insistió en la «Vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorezcan su existencia». A partir de ese momento, la acción represora supuso el más amplio ejercicio de abuso de poder, de corrupción transformada en degradación moral, de delito de Estado amparado en la impunidad: arrogancia estamental, menosprecio a la sociedad civil y falta de temor a toda posible consecuencia judicial de sus actos fueron incrementándose a medida que «progresaba» la «guerra sucia» contra la subversión (4). Dueños absolutos del poder, los represores actuaron fuera de todo límite legal y de todo

pótesis intermedia, la del Dr. Emilio Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, ofrece un total aproximado de 20.000.

(3) Informe CONADEP. «Nunca más». Seix Barral/Eudeba. Barcelona, 1985, pp. 9-10.

(4) En estos rasgos se reconoce el llamado modelo pretoriano dirigente en su más dura acepción.

principio ético, enarbolando precisamente la bandera de la «moral cristiana». De la arrogante «superación» de principios morales, es clara muestra la afirmación de uno de los tantos represores:

«Hubo que olvidar por un instante (*sic*) las enseñanzas del colegio militar y las leyes de la guerra convencional, donde los formalismos (el honor y la ética) son las partes esenciales de la vida castrense, para consustanciarse con este nuevo tipo de lucha». «Decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces cómplices de la subversión».

Esta actuación fue conformando la realidad de la Argentina como un *Estado Militar*, con la prohibición total de partidos y de cualquier actividad política, el aniquilamiento implacable de toda oposición, absoluto control social (5), y una postura oficial de extrema arrogancia ante la opinión pública nacional e internacional. En este último aspecto, el régimen negó sistemáticamente la existencia de secuestros, cárceles clandestinas, torturas, desaparecidos, precisamente cuando se producían miles de denuncias de asociaciones de Derechos Humanos (6). Y algunos de sus portavoces llegaron a jactarse abiertamente de sus «hazañas» con un cinismo blasfemo. Baste como ejemplo el testimonio recogido por el periodista Timerman de un torturador, el capitán «Beto»: «Sólo Dios quita y da la vida. Pero Dios está ocupado en algún sitio y aquí, en Argentina, somos nosotros quienes nos ocupamos de esta tarea» (7).

(5) Las Fuerzas Armadas argentinas se sintieron obligadas a ejecutar una depuración cultural y social absoluta y llevaron a la práctica, con inigualable celo, una acción evocadora del 10 de mayo de 1933, en Berlín, cuando unos 20.000 volúmenes eran apilados y quemados y se jactaron de ello:

«De la misma manera en que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina».

En verdad estremece reconocer en las palabras del verdugo la justificación «cristiana» de sus actos.

(6) Incluso cuando el presidente Carter obligó al presidente de la Primera Junta Militar, general Videla, a admitir por primera vez la existencia de desaparecidos, lo hizo con un cinismo rayano en lo grotesco: aceptó que sólo existían cuatro tipos de desaparecidos: los que pasaban a la clandestinidad para pasar a la subversión, los eliminados por la propia guerrilla por traidores a la misma; los que quedaron irreconocibles por explosiones o incendios de los enfrentamientos; y los que podían imputarse a «excesos o inevitables errores» cometidos en la represión. (Prudencio García: *El drama de la autonomía militar*, Alianza, 1995).

(7) *Diario 16*, Madrid, 20-XII-1981.

Los factores concurrentes: una sucesión de reincidencias

ENTRE los estudios que se han venido realizando sobre la represión dictatorial argentina, desde diversas perspectivas, nos parece especialmente esclarecedor el libro «El Drama de la Autonomía Militar» de Prudencio García. Para éste, el caso argentino se explica por un cúmulo de factores recurrentes propios, específicos, y otros que en mayor o menor grado también están presentes en las características más generalizadas en los ejércitos de América Latina.

Entre los factores que se reconocen en la práctica totalidad de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, cabe señalar el fuerte adoctrinamiento anticomunista que las mismas reciben desde la II Guerra Mundial, con una intensa formación táctica e ideológica, en centros de Estados Unidos como Fort Benning (Georgia), Fort Gulik (en la zona norteamericana del Canal de Panamá) y el National War College. La «Guerra Fría» acentuó aún más el carácter obsesivamente anticomunista del adoctrinamiento en estos centros, que contaron entre sus alumnos a Hugo Banzer, Augusto Pinochet, Ernesto Geisel, Alfredo Stroessner y Jorge Videla. El comunismo, el Mal Absoluto, debía ser —según estas enseñanzas— combatido de modo permanente y sin reparar en medios: las fuerzas armadas estaban llamadas a la lucha «contra toda forma de subversión» en una especie de Tercera Guerra Mundial.

Progresivamente, el concepto de defensa frente al enemigo exterior fue desviándose hacia el de «enemigo interior», el «comunismo subversivo» que, como había demostrado el caso cubano, aspiraba a hacerse con el poder. Todos estos principios acabaron plasmándose en un sistema teórico homogéneo: la *Doctrina de la Seguridad Nacional*. Según ésta:

a) Todo el continente americano, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, correspondería a un espacio geopolítico (8) de neta adscripción occidental cristiana que, de manera conjunta, se plantearía la defensa frente al enemigo común, el enemigo interior objeto de una «guerra permanente y total» por todos los ejércitos de dicha área.

b) El comunismo plantea la III Guerra Mundial a través de la penetración ideológica de la subversión izquierdista. Las Fuerzas Armadas deben ser la «vanguardia operativa de Occidente».

(8) Según esta concepción geopolítica nacida de los teóricos alemanes de finales del XIX, adoptada y desarrollada en la Alemania nazi, y enseñada en el National War College y en la Escuela Superior de Guerra de Brasil, un Estado que desea ser potencia debe disponer de influencia más allá de las fronteras de su propia nación.

c) Adopción de los conceptos y tácticas de «contrainsurgencia» y de «lucha contrainsurgente» desarrollados por el ejército francés en Indochina y Argel, gravemente lesivas de los derechos humanos.

Como consecuencia de esta doctrina, los militares latinoamericanos se atribuyeron el monopolio de lo patriótico frente a los «apátridas» a los que se sentían obligados a aniquilar en ese concepto de «guerra total». La inmediata consecuencia de estos principios fue la *desviación de la función militar hacia la función policial interior*: vigilar, controlar y perseguir al «enemigo interior». En este marco, los conceptos éticos militares tradicionales se postergan y degradan asumiendo métodos como la tortura sistemáticamente aplicada para la obtención de información; la creación de la llamada «inteligencia militar», que actuó en prácticamente todos los países latinoamericanos; y el fanatismo paranoico en la detección y aniquilamiento del enemigo interior.

También es común a las fuerzas armadas latinoamericanas su *respaldo a modelos económicos* basados en un capitalismo puro y duro, con un control férreo del sindicalismo para que las posibles reivindicaciones salariales no supusieran un peligro para la acumulación de capitales. Las Fuerzas Armadas Argentinas han sido en este sentido «ejemplares».

Entre los factores específicamente argentinos, que intensifican en parte los hasta aquí apuntados, Prudencio García destaca la *autonomía militar*:

«La autonomía del estamento castrense, llevada a sus últimas consecuencias teóricas y prácticas, morales, filosóficas, sociales y políticas. La autonomía militar respecto al resto de la sociedad, con sus consecuencias directas en el campo de las ideas y en el campo fáctico de su aplicación» (9).

Esta autonomía —que no debe interpretarse como aislamiento social, institucional, doctrinal ni económico— se caracteriza, según el mismo autor, por dos certezas sólidamente instaladas en las mentes de muchos militares argentinos: a) que «pueden y deben intervenir en las grandes cuestiones de la política nacional, juzgando, valorando y decidiendo su mayor o menor concordancia con los «intereses de la patria»; y b) cuando la actuación del gobierno constitucional no responde a estas expectativas y se aparta demasiado de ellas, el estamento militar puede y debe actuar sobre aquél en todos los grados posibles, desde la fuerte presión estamental hasta el golpe de Estado militar.

Ambas convicciones se manifestaron en la práctica en el *persistente intervencionismo militar en Argentina, con la sucesión de golpes de Estado* pro-

(9) *Op. cit.*, pp. 350.

ducidos desde 1930, con la colaboración y responsabilidad de las fuerzas políticas civiles en el proceso de contumaz golpismo. Cuando todavía Argentina era «uno de los Estados más estables y organizados, no sólo de América, sino del mundo», según manifestaba el analista Cocil Jane en 1929 (10), el golpe militar encabezado por el general José Uriburu, derrocó al presidente constitucional Hipólito Irigoyen (11), del Partido Radical, el 6 de septiembre de 1930. Para la mayor parte de los analistas, aquí se consuma el inicio de la crisis institucional y de cincuenta años de decadencia económica cada vez más acusada. Desde entonces a la fecha, ningún presidente fue elegido libremente en Argentina; y la afición de los militares por el poder presidencial se hizo incuestionable: de 16 presidentes que tuvo el país entre 1930 y 1973, 11 fueron militares; después del interregno de las presidencias peronistas de Cámpora, Perón y de su segunda esposa Isabel, entre 1972 y 1976, siguieron otros seis largos años de presidencias militares-dictatoriales (Videla, Viola, Galtieri, Bignone), las más directamente implicadas en la represión.

En los más de cincuenta años de dictadura militar, las Fuerzas Armadas argentinas han ido reforzando sus convicciones de protagonismo indiscutible y único de la política nacional, como un verdadero partido militar. Pero, al mismo tiempo, es obvio que si se da esta situación es porque cuentan con el apoyo civil de parte de la población o están al servicio de ésta. Y en todos los casos parece obvia la confirmación de esta relación: los mandos militares, de predominante extracción social media, han servido de «brazo armado» para la defensa de los intereses de diversos grupos de poder oligárquico.

También algunos medios de comunicación y muchos políticos —no todos, ya que muchos fueron víctimas del aparato represor hasta el exterminio— tienen parte de responsabilidad en el «golpismo» reincidente. La

(10) A principios de siglo, la Argentina aparecía entre los países más ricos y con más futuro, con un producto per cápita superior a los de Japón e Italia; con índices de mortalidad y de nivel sanitario excepcionales; una clase media sólida y extensa (50 por 100 de la población total) de impresionante nivel cultural; una población constituida por inmigrantes europeos y sin problemas de integración nacional; una tasa de analfabetismo menor del 10 por 100; con más teléfonos, médicos y coches por habitante que la misma Francia; con una consistente tradición democrática, de notable predominio de gobiernos civiles de base constitucional; y con un potencial económico y de desarrollo excepcional.

(11) La causa definitiva para su destitución fue su propósito de nacionalizar las fuentes energéticas, ante lo cual los monopolios extranjeros naturalmente se opusieron. Fue el primer «llamado a los cuarteles».

prensa conservadora declaró, por ejemplo, una guerra sin cuartel contra Irigoyen abriendo a los militares una sección de comentarios políticos hostiles; hoy sabemos también que el golpe militar de 1955 vino precedido por reuniones entre miembros del partido radical y altos mandos militares.

El proceso golpista es reiterado, reincidente en la historia argentina, hasta en sus detalles. En 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Arturo Illia, del Partido Radical y de un talante democrático indudable, con un golpe minuciosamente preparado, encabezado por Pascual Pistarini, y con la entrega del poder al general Juan Carlos Onganía (12). Varios años después de la acción, hubo también un arrepentimiento público: el del coronel Perlinger que tuvo la difícil misión de expulsar al presidente Illia de la Casa Rosada. A Onganía le sucedió en la Jefatura del Estado el general Levingston. El sucesor de éste, el teniente general Alejandro Lanusse, también se sintió obligado a mostrar su arrepentimiento público, años más tarde, en su libro «Mi testimonio».

Fueron varios años de sucesivas Juntas Militares a las que el pueblo se acostumbró a sentir como un mal irreparable y atemorizador: sólo quedaba el «no te metás» o la radicalización. Y el proceso incluyó «golpismo interno», dentro del mismo estamento militar. En 1981 el general Roberto Viola asume la presidencia pero la Junta lo sustituye a los pocos meses por Leopoldo Galtieri, que declara en un gesto de inconsciencia sin precedentes la Guerra de las Malvinas (1982). Después de la derrota, el propio ejército sustituye a Galtieri por el general Reynaldo Bignone.

En 1983, las elecciones generales declaran vencedor a Raúl Alfonsín, lo que supone la restitución del orden constitucional pero no el esperado castigo a los represores. A lo largo de su mandato, los juicios a los ex comandantes militares se cerrarán con la ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida; los «carapintadas» de Aldo Rico se alzarán en la Semana Santa de 1987 y volverán a hacerlo liderados por el coronel Seineldín en 1989: sus acciones darán el resultado del vergonzante indulto posterior.

Otro de los factores —éste sí específicamente argentino— es el peronismo como fenómeno político y social, con su doble desviación hacia la violencia de extrema derecha y de extrema izquierda. También su historia se remonta a un «golpe

(12) El «partido militar» dio el «golpe» precisamente por la decisión del presidente de legalizar al partido peronista con visitas a las previstas elecciones que no llegaron a convocarse.

de Estado» primigenio: el coronel Juan Perón derrocó en 1943 al presidente Ramón Castillo; pero en 1946 y en 1952 revalidó en las urnas su poder populista, representando a los «descamisados» pero desde un ejercicio del poder autoritario, personalista, de inequívocas connotaciones fascistas. Derrocado por otro golpe militar en 1955, se retiró a su exilio de Puerta de Hierro durante casi dos décadas, hasta 1973. Desde el derrocamiento, los poderes sindicales peronistas ofrecieron flagrantes contradicciones: obreros y sindicalistas de base luchaban contra los golpistas; mientras sus dirigentes burócratas pactaban con ellos. La distancia del «caudillo» junto al proceso imparable de decadencia económica del país, fortaleció entre las clases más desfavorecidas el mito de un «mesías» largamente esperado. Contribuyeron también al mito, tal vez de modo inconsciente, las cartillas de lectura que durante el último período presidencial peronista rezaban «amo a Evita», «Evita me ama», y en las que aprendieron a leer dos generaciones de argentinos.

La llamada por los golpistas del 66 «Revolución Argentina», al impedir la participación política de un partido de tan amplia representación en las clases populares, fue una de las causas determinantes de la progresiva radicalización de las juventudes, que acabaron empuñando las armas a partir de 1970 desde el movimiento Montonero; y del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). De las filas peronistas surgieron dos grupos violentos, a derecha y a izquierda del Movimiento: AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y Montoneros (13), respectivamente.

Las organizaciones de extrema izquierda crearon un clima de violencia que aportó las primeras víctimas de los 70 y abonaron el terreno para el terrorismo de Estado. En un informe elaborado por el «Poder Ejecutivo Nacional» —eufemismo que designaba a la Junta militar encabezada por Videla después del golpe de Estado de 1976— se señala que las «víctimas del terrorismo subversivo» representado por Montoneros, ERP, FAL, FAR y otros grupos menores de extrema izquierda, ascendía a 687. Pero los datos aportados por esta y otras listas procedentes de las mismas fuentes fueron objeto de la más descarada manipulación para justificar la re-

(13) A mediados de 1970, se dio a conocer la organización «Montoneros», escindidos del peronismo oficial, que reclutaban a sus miembros en «sectores nacionalistas» y en «asociaciones de la juventud católica». También en el mismo año nace el ERP como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ambas organizaciones de extrema izquierda, al igual que las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), protagonizaron actos sangrientos que sirvieron de excusa para el golpe militar de 1976.

presión estatal, incluyendo, por ejemplo, víctimas de la Triple A, como si efectivamente hubieran sido asesinados por grupos de izquierda: el editor Alberto Burchinón, los hermanos adolescentes Jaime y Lía Scherzon, los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, los abogados Angel Pisarello y Oscar Centeno, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville...

La ultraizquierda cometió asesinatos, secuestros extorsivos, «copamientos» (ataques sorpresa) a establecimientos militares. Sus objetivos fundamentales fueron los empresarios (15) y la cúpula militar (16).

La Triple A, violenta y clandestina, paramilitar y parapolicial, fue fundada por López Rega, que la financió con el presupuesto del Ministerio del Bienestar Social que dirigía desde la vuelta al poder de Perón en 1973. Junto a López Rega, el segundo cerebro responsable de la Triple A fue otro destacado peronista, el comisario general de policía Alberto Villar, al que Perón designaría, en septiembre de 1973, jefe de Policía Federal. Integraron esta organización oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en actividad, ex policías dados de baja por sus antecedentes delictivos, delincuentes de frondoso pasado, matones sindicales, y miembros de las J.S.P., y J.P.R.A., sectores juveniles del peronismo fascista (14). Poco tiempo después, aparecerá en Córdoba una organización de signo similar a la Triple A, el «Comando Libertadores de América», de dependencia directa del Tercer Cuerpo de Ejército.

La Triple A desplegó su agresividad en la matanza de Ezeiza de 1973, justo cuando llegaba de regreso del exilio Perón, y posteriormente sobre políticos e historiadores de la Izquierda como Ortega Peña o Silvio Frondizzi, sacerdotes como Carlos Múgica, periodistas como Julio César Fumarola o Roberto Reyna... Incluso a la Triple A se debe el asesinato del Jefe de Policía de Salta, Rubén Fortuny, después de haber encarcelado éste a conocidos torturadores de la fuerza policial. Como muestra del poder destructivo de la Triple A, que, después de la muerte de Perón, intensificó aún más sus ataques, recordemos las manifestaciones de Ignacio González Jansen (17).

(14) Eduardo Luis Duhalde: *El Estado terrorista argentino*. Argos Vergara. Barcelona, 1983, pp. 45 y 48.

(15) Entre sus víctimas, los hermanos Born, los industriales Oberdan Salustro y Antonio Dos Santos, el gerente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), etc.

(16) En la extensa lista de militares asesinados produjeron especial impacto los casos de Pedro Aramburu y Humberto Viola (e hija).

(17) Ignacio González Jansen: *La Triple A*. Editorial Contrapunto. Buenos Aires, 1986, pp. 39 y 19.

«En sólo dos meses, entre julio y septiembre de 1974, se produjeron 220 atentados de la Triple A —casi tres por día— 60 asesinatos y 44 víctimas resultaron con heridas graves»... «La Triple-A recreó, con una violencia de magnitud inédita, la represión que el pueblo argentino conoció en las horas más dolorosas de su historia. Más de 2.000 muertos en treinta meses».

Reincidencia en los métodos

COMO revela Ricardo Rodríguez Mola (18), los modos represivos empleados por las Juntas Militares en Argentina —*tortura y desaparición de personas*— tienen antecedentes muy anteriores a 1976. La tortura tiene una honda tradición «de remota pero innegable herencia europea e hispánica» (19); la picana nació en las estancias ganaderas de la pampa y su aplicación como instrumento de tortura para humanos se remonta a los años 30 (20). La desaparición de personas por los «Grupos de Tareas» del Ejército, la Armada o la Aviación, uno de los procedimientos más característicos y dramáticos del caso argentino, también tiene precedentes anteriores al golpe militar del 1976: era conocida en otros países y en la propia Argentina. Guatemala, Brasil y Chile practicaron el método de la desaparición total del enemigo a partir de 1963 y hasta 1966; pero fue una de las estrategias más «eficaces» para los propósitos del nazismo en los territorios ocupados por Alemania en la Europa Occidental (21).

La desaparición pública puede convertir al torturado en mártir y al

(18) *Tortura y orden represivo en Argentina*. EUDEBA, Buenos Aires, 1984.

(19) Prudencio García, *op. cit.*, p. 134.

(20) Ricardo Rodríguez Molas describe más de diez sistemas técnicos de la barbarie de los torturadores desde 1930; entre otros, «la silla», «las prensas», «la tenaza sacalenguas», «el serrucho», «las agujas caldeadas al rojo», cuyos nombres bastan para imaginar sus terribles efectos en los torturados. De los medios empleados por los militares de la «Revolución Libertadora», de 1976 en adelante, los medios de comunicación han sido lo suficientemente explícitos como para reiterarlos ahora.

(21) El decreto «Noche y Niebla» dictado por Hitler en 1941 limitaba la pena de muerte para los casos de flagrante delito y ordenaba que se aplicase, sin embargo, la deportación secreta «al amparo de la noche» para todos los sospechosos de «poner en peligro la Seguridad del Reich». El genocidio nazi llevado a cabo en los campos de concentración son buena muestra de la «amplia y generosa» aplicación de esta medida.

descontento popular en insurrección; la desaparición de las personas sin que nadie sepa qué ha sido de ellas produce en las poblaciones desconcierto y el temor de sufrir la misma suerte, un desesperado temor de que cualquier acción posterior de protesta o reclamación genere represalias similares. Como manifiesta Amnistía Internacional,

«una desaparición encubre la identidad del autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie puede ser presumiblemente acusado de nada... (la desaparición) viola una amplia gama de derechos humanos e impone un sufrimiento físico y psicológico generalizado y permanente.»

Y este método fue aplicado ya entre 1966 y 1976, haciéndose sentir con especial rigor en el proceso de represión de las libertades políticas del período, y sobre todo, a partir de los levantamientos populares de Córdoba y Rosario (1969). La primera denuncia de desaparición se produjo en 1972 con el descubrimiento del cadáver de un estudiante de Santa Fe, pero las investigaciones del caso que inició un grupo de parlamentarios se vieron truncadas por las amenazas que éstos recibieron. Y ya en 1973 la desaparición de personas se instaló entre una población cada vez más temerosa o escéptica frente a los rumores que comenzaban a prodigarse, con la irrupción de la Triple A y con el «Comando Libertadores de América». Como expresó Cortázar en 1981: «Si es cierto que toda muerte humana entraña una irrevocable ausencia, ¿qué decir de esta ausencia continua a imponerse como una presencia abstracta, como la negación obstinada de la ausencia final?».

Otro de los factores recurrentes en el proceso argentino, reconocido incluso por los propios torturadores, es la decisiva *influencia del más recalci-trante pensamiento ultraderechista europeo y del integrismo francés en las Fuerzas Armadas*, así como en otros estamentos de la sociedad argentina. En 1977, la Comisión Argentina pro Derechos Humanos incluyó en su informe una evidencia del espíritu que animaba a los responsables de la represión, una especie de arsenal ideológico-religioso:

«En la Argentina, la ultraderecha, especialmente ligada a las Fuerzas Armadas por medio de su presencia ideológica en las escuelas militares y policiales, ha desarrollado verdaderas teorías mezclando a los judíos con cosas tan dispares como la masonería, la Iglesia y el Vaticano, los protestantes, la gran banca internacional y el comunismo..., una «sinarquía internacional», especie de diabólica cofradía en la que se confunden para dirigir los destinos del mundo... Aunque parezca increíble, esta concepción paranoica de la realidad está presente, de una manera u otra, en la mayoría de los integrantes de los grupos represivos y las Fuerzas Armadas Argentinas.»

Y a conformar este cuadro doctrinal contribuyeron las enseñanzas de un grupo de ideólogos católicos franceses, reacios a aceptar la notable flexibilización oficial de la Iglesia de Roma en los sesenta y setenta en materia de pluralismo democrático, y que fueron seguidos por un amplio grupo de católicos argentinos, de fuerte tendencia conservadora; y de profesores militares que trasladaron tácticas y doctrinas de la lucha anti-subversiva en Argel a Argentina. Dos figuras representativas de estos afluentes que convergen en el mismo proceso son, entre otros, Georges Grasset, quien fue capellán de las fuerzas francesas en la represión independentista en Argelia y «guía espiritual» de la Organización del Ejército Secreto y, acabada la «guerra sucia» argelina, pasó a España y posteriormente a Argentina, donde dirigió la revista *Verbo*, a la que incorporó eclesiásticos, civiles y militares, entre ellos, al coronel Juan Francisco Guevara, uno de los gestores del Golpe de Estado que derrocó a Illia.

En la misma dirección doctrinal, destacan otras figuras que influyeron decisivamente en la formación de los cuadros militares argentinos: el profesor Jordán Bruno Genta —durante 25 años se dedicó a denunciar los «peligros que amenazan al país: el comunismo, la masonería, los judíos y el peronismo»—, que influyó decisivamente en la intentona golpista frustrada encabezada por Cayo Antonio Alsina contra el gobierno «judeomasónico» de Arturo Frondizi y, después del fracaso, en varias generaciones de alumnos de la Escuela de Aviación de Córdoba.

Un cúmulo de factores que deben ser conjurados definitivamente

ES evidente que lo ocurrido en Argentina en estos últimos años no obedece a una única razón; más bien responde a la concurrencia de un cúmulo de factores de larga data, de amplia extensión y, por ende, de difícil erradicación. Están muy recientes además los hechos y continúan abiertas las heridas: el proceso democrático es incipiente, los miles de desaparecidos aún son buscados por los suyos; y nada hace prever que las Fuerzas Armadas Argentinas hayan cambiado tanto como para que, desde ahora, la reactivación de los fantasmas del pasado no sea una amenaza viva. Las mentalidades no cambian de un día para otro, menos aún cuando el ejercicio de sus postulados se ha activado y reactivado tantas veces y por tantos años. Si bien, desde la

caída del comunismo, el proceso democratizador ha avanzado en las repúblicas latinoamericanas y no se percibe un enemigo interno de este signo del mismo modo, no olvidemos que el sentimiento y la convicción de la autonomía castrense es fuerte y puede encontrar con la misma facilidad nuevos enemigos interiores.

Pero, si estos factores continúan vivos, aunque adormecidos, no son las medidas más adecuadas apelar a principios que las modernas constituciones limitan como el de la obediencia debida, el indulto, el «aquí no ha pasado nada», un «borrón y cuenta nueva...» aun cuando el pasado parece prodigarse en arrepentimientos que preanuncian reincidencias. No cuando además de la muerte, las fuerzas militares argentinas han sido las causantes de la humillación de todo un pueblo, la ruina y la decadencia económica de una nación que lo tenía todo para garantizar prosperidad, paz y justicia a sus hijos. Las víctimas del terrorismo de Estado también merecen y reclaman justicia, y el Estado está doblemente obligado a proporcionarla por su responsabilidad y porque su actuación no está, no debe estar, como en el caso de los represores de las pasadas décadas, exenta de la obligación de responder a la legalidad.

Ante estas circunstancias, sólo cabe la afirmación de *rechazo al olvido* que Julio Cortázar hizo en 1981 en París. El único conjuro capaz de evitar la reincidencia es avivar el recuerdo de cómo fue posible que a lo largo de más de dos décadas la dominación autoritaria pusiera en marcha un sistema represivo sin parangón, con la violación de los derechos fundamentales del hombre. No podemos ni debemos olvidar ni a las víctimas, ni a sus verdugos, ni las causas o factores externos e internos que dieron lugar al proceso de terrorismo de Estado más cruel de los últimos tiempos. El rechazo al olvido es, creemos, el único camino para que «nunca más» sea definitivamente «nunca más».